Puerto Madryn, de Junio de 2016.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: **"D., C. L. S/ Declaración de incapacidad de (M. D.)"**, Expte. 121 Año 2016, venidos del Juzgado de Familia Nº 2 (Expte. 410/2014).

I. Llega esta causa a la Alzada por haberse dictado en primera instancia a fs. 131/137, Sentencia Definitiva registrada bajo el Nº 26 del año 2016, declarando que el Sr. M. D. "es incapaz – debido a sus padecimientos mentales- de realizar actos jurídicos de administración y disposición y garantía de bienes inmuebles, muebles registrables, y otros bienes de cualquier tipo de valor, percibir y administrar los beneficios derivados de la seguridad social, aceptar herencias y donaciones o gravar sus bienes, realizar actos que importen cambiar su estado civil, reconocer hijos u obligaciones alimentarias, prestar su consentimiento informado para el suministro de medicación, y/o la realización de tratamientos psicológicos, psiquiátricos y/o médicos, aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos que se le propongan, como así también actos relativos a la identidad de género, ocupar cargos electivos, públicos o privados en los que intervenga de administrador o director, votar ni ser votado en elecciones generales como así tampoco en entidades asociativas sin fines de lucro. No puede vivir solo ni conducir vehículos, ni realizar tareas laborales. Requiere de apoyo y asistencia para intervenir en juicio, puesto que la complejidad de decisiones que debe tomar no se cubren con la asistencia letrada, así como también para movilizarse dentro de la ciudad en transporte público, o privado, administrarse la mediación diaria, asumir y sostener su tratamiento, realizar viajes de larga distancia, etc, así

como también asistencia para la ejecución de actividades de la vida básica, debiendo contar para ello con la participación necesaria de la administradora de apoyo que por la presente se designa. Puede realizar actos personalísimos y aquellos de la vida diaria para los que está capacitado y disponer de sumas de dinero exiguas que le permitan hacer compras para sus necesidades diarias. El nombrado conserva todos los derechos no alcanzados por la interdicción, debiendo su ejercicio someterse a las leyes y reglamentos que los regulen. Todo ello, por el término máximo de tres años, pudiendo ser revisado el presente decisorio en cualquier tiempo a instancias de la persona interesada. La restricción a su capacidad

decretada tiene su fundamento en el diagnóstico de demencia por alzheimer, con fecha de comienzo aproximadamente de hace 10 años, pronóstico progresivamente deteriorante, sin necesidad de internación actual".

No habiendo sido apelado el mencionado decisorio, corresponde a esta Cámara pronunciarse en consulta conforme lo previsto en los arts. 256 y 641 in fine del CPCC.

II. El presente proceso se inicia con dos certificados médicos expedidos por dos profesionales de la salud, un Médico Neurólogo y un Médico Generalista.

Frente a ello, la representante de la AFI, citando un antecedente de este Cuerpo, requiere que se agregue en autos el certificado de un médico especialista en psiquiatría.

La parte a fs. 15, presenta un certificado expedido por la Dra. V. B., quien luego se expide como parte de la junta médica, a fs. 105/106.

Es preciso señalar en primer lugar, que los autos citados por la AFI a fs. 13, no expresan lo manifestado por la representante de dicho organismo. Este

Excmo. Cuerpo no se ha expedido respecto la exigencia de que los certificados médicos presentados al inicio de un proceso de determinación de capacidad debían ser de especialistas en psiquiatría.

Por tal motivo, sin perjuicio de la inadvertencia de haber integrado la Junta Médica la Dra. V. B., quien suscribe uno de los certificados con los que se da inicio a las presentes actuaciones, se agregaron en autos dos certificados suscriptos por dos médicos, por lo que se tendrá como válida la actuación de la mencionada profesional en la pericia que luce a fs. 105/106.

III. La consulta en los procesos de Declaración de Demencia esta instituida en beneficio del presunto incapaz, *"... se trata de protegerlo de la posible negligencia de su representante. Su finalidad, es brindar el máximo de garantías al presunto insano, frente a la trascendencia del pronunciamiento que lo priva de su capacidad. En tal sentido ha dicho la jurisprudencia que lo que justifica el examen por el tribunal de alzada es la restricción de la capacidad del causante que importa la declaración de demencia; que la consulta en cuestión tiene por finalidad acordar al presunto demente las mayores garantías partiendo de la base natural de que el estado demencial es un estado excepcional y que como tal exige el agotamiento de los resortes judiciales tendientes a evitar que pueda ser declarado demente quien no lo es"*. (*"El Recurso ordinario de Apelación en el Proceso Civil"*, Roberto G. Loutayf Ranea, Ed. Astrea, pág. 453).

Asimismo, *"... La consulta prevista por los arts. 253 bis y 633 del Cód. Procesal provoca la intervención obligada del tribunal de segunda instancia"* (CNCiv, Sala A, 1/6/04, ED, 209-206; íd., Sala C, 24/9/02, ED, 200-287" y "*Se ha entendido que como instituto de orden público, es irrenunciable*". ("Código Procesal", Colombo-Kiper, t. III, 2006, pág. 75).

Además, *"... El efecto de la consulta es similar al efecto suspensivo con que se concede un recurso de apelación. Hasta tanto no se haya cumplido con el trámite de ésta, la sentencia que motiva la consulta no alcanza la calidad de firme."* (CNCiv, Sala A, 1/6/04, ED, 209-206).

Del análisis de las presentes actuaciones este Tribunal concluye que se encuentran cumplimentados los recaudos exigidos por los arts. 37, 38 y 40 del C.C.C.

En autos se presenta a fs. 08/09 la Sra. L. D., promoviendo formal demanda de determinación de capacidad respecto de su padre M. D..

Se da cumplimiento a lo previsto por el art. 639 del CPCC., con la elaboración del pertinente informe de fs. 76 suscripto por los Drs. G., y N., Médicos Forenses, y a fs. 105/106 por la Dra. V. B. quienes concluyen que M. D. padece Demencia por síndrome de Alzheimer, afección que implica demencia en sentido jurídico.

A fs. 71/72 obra informe de evaluación elaborado por la Lic. Domínguez del ETI, y a fs. 98/99 informe de la Lic. L., Terapista Ocupacional. De la audiencia agregada a fs. 120 surge que la Sra. Magistrada a quo mantuvo contacto personal con el Sr. M. D..

A fs. 146, emite su dictamen la Asesora de Familia e Incapaces, considerando que se encuentran reunidos los extremos para confirmar en todos sus términos la sentencia respecto al Sr. M. D..

En consecuencia, tomando en consideración las pautas enunciadas y las constancias analizadas corresponde confirmar la sentencia venida a consulta.

Por ello, la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn;

R E S U E L V E:

1) CONFIRMAR la sentencia de fs. 131/137, por las consideraciones efectuadas.

2) REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, DEVUÉLVASE.

La presente sentencia es firmada por dos Jueces de Cámara en virtud de encontrarse una vocalía vacante y concordar en la solución del caso (Art. 7 y 8 Ley V N° 17).

Registrada bajo N° /2016 SIF.